



Manifiesto movilizaciones 23 de enero

Las Cajas de Ahorros son entidades que nacieron en toda Europa como modelo de banca social, ética y territorial frente a la usura bancaria, y han desempeñado un papel fundamental en la historia relativamente reciente de este país como agentes para la inclusión financiera de las capas más desfavorecidas de la sociedad y para la articulación territorial del Estado, revirtiendo además beneficios a la sociedad a través de sus Obras Sociales.

La reestructuración del Sistema Financiero español que se pretende, al amparo de una crisis que ya se ha llevado por delante 35.000 puestos de trabajo en el Sector desde 2008, ha acabado por revelar la agenda oculta de los poderes económicos para el deliberado desmantelamiento programado de estas entidades, con la complicidad de presuntos servidores públicos, administradores, gestores y auditores.

Un desmantelamiento indecente y obsceno, que ha provocado el drama inaceptable de los deshaucios y una dura quita inhumana para los ahorradores y ahorradoras poseedores de preferentes y obligaciones, títulos con los que el Banco de España indujo a capitalizarse a las Cajas de Ahorro, ignorando después su valor, a causa de lo cual la CNMV cerró los mercados en que se negociaban, provocando esa quita.

Un desmantelamiento detrás del cual se pretende encubrir, también, una maniobra para facturar a terceros las responsabilidades de aquellos cuya letal demora en reconocer la crisis ha puesto en peligro la propia recuperación, así como la de quienes pretenden salir de ella con las mismas obsoletas recetas liberales disfrazadas de modernidad con las que pretenden privatizar los servicios públicos y acabar con el Estado del Bienestar que tanto ha costado construir.

Una estrategia para ocultar la tardanza interesada en adoptar medidas para una reestructuración ordenada del sistema financiero, que va a encarecer notable e innecesariamente la factura de esa reestructuración, y que ha provocado el colapso del crédito del que dependen las pequeñas y medianas empresas de este país, a muchas de las cuales han abocado al cierre siendo entidades viables, incrementando sin necesidad las cifras dramáticas del desempleo en nuestro país.

La reestructuración del Sistema Financiero español pretende condenar al paro injustamente a 15.000 trabajadores y trabajadoras más, bancarios, que no banqueros, que no han hecho otra cosa que



cumplir con su trabajo en condiciones extraordinariamente difíciles, mientras los responsables del desastre quedan impunes y, muchos de ellos son indemnizados con importes millonarios y recolocados en grandes empresas, como Telefónica; en contraste con las cicateras medidas que pretenden imponer a los trabajadores y trabajadoras del Sector.

La reestructuración del Sistema Financiero español que se pretende va a provocar la exclusión del acceso a los servicios financieros de parte importante de la población y el desarrollo asimétrico de los diferentes territorios del Estado, llevándonos al desequilibrio de tiempos que creíamos felizmente olvidados.

La reestructuración que pretenden pone además en riesgo la propia viabilidad de las empresas nacionalizadas, puesto que obliga a encarar el futuro con una plantilla empobrecida y a la que han contribuido a criminalizar, en el marco de una estructura empresarial a la que se privaría, en nombre del sacrosanto principio liberal de la competencia, de oficinas rentables y áreas de negocio que necesitan para devolver su inversión a la sociedad, responder de sus obligaciones con sus clientes y cumplir su función como agentes capaces de restaurar el flujo de crédito, que es una condición imprescindible para empezar a salir de esta crisis. En este sentido, exigimos a los actuales responsables de estos bancos nacionalizados –FROB-Banco España y el propio Gobierno- que asuman su responsabilidad y rectifiquen su posición en relación con estos planes agresivos, desproporcionados y antisociales que están planteando en el Sector.

La reestructuración del Sistema Financiero español que se pretende implica, en definitiva, la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios futuros, sin explicar en beneficio de qué turbios intereses se han creado las condiciones para acabar hundiendo empresas a golpe de decreto, con los reguladores y supervisores mirando para otro lado, cuando no legislando a favor de obra, y pasarle la factura a la clientela, las plantillas y a la sociedad, a la vez que se corre el riesgo de crear un oligopolio en el Sector al concentrarse el sistema financiero en muy pocas entidades con un gran poder y control sobre el mismo.

Los trabajadores y trabajadoras del Sector no nos vamos a rendir sin luchar. Porque hay otra manera de hacer las cosas, sin dañar los intereses de la sociedad, de los clientes y de las plantillas, que puede y debe ayudarnos a salir de la crisis.

OTRA SALIDA ES POSIBLE.